

**María Pilar García-Guadilla**

**La praxis del poder popular en Venezuela:  
ciudadanía, inclusión y autonomía  
de las organizaciones sociales bolivarianas**

**1. Punto de partida: premisas y enfoques**

La exclusión histórica de los sectores populares junto con la falta de continuidad y el carácter aislado de las políticas públicas han llevado a la agudización del déficit de viviendas y al deterioro de los servicios y de la calidad de vida de los barrios pobres. Durante el periodo 1958-1998 los gobiernos tomaron importantes iniciativas apoyándose en la renta petrolera para resolver los problemas; sin embargo, éstos se incrementaron y para mediados de los noventa, más de la mitad de la población estaba excluida de los beneficios de ciudadanía (Rivas 2004). En este contexto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, producto de un proceso constituyente, se orientó a satisfacer las demandas de inclusión, democratización, ciudadanía y equidad.

El Soberano, el Pueblo y la Comunidad o Sociedad Organizada entre otros referentes, constituyen el sujeto o actor principal de la Democracia Participativa y Protagónica inscrita en la CRBV. El término *poder popular* no existe como tal en la CRBV pero se utiliza con frecuencia en el discurso oficial para encarnar a los actores antes mencionados. Su construcción supone el relanzamiento ideológico de viejas organizaciones sociales populares junto con la creación de nuevas organizaciones que llamaremos *bolivarianas* por haber sido creadas por el presidente Chávez para dar apoyo a su proyecto político-ideológico y entre las cuales destacan: los Círculos Bolivarianos (Hawkins/Hansen 2006), las Mesas Técnicas del Agua (Arconada 2005; Lacabana/Cariola 2005), los Comités de Tierra Urbana (Antillano 2005; Contreras 2006; García-Guadilla 2007a) y los Consejos Comunales (Pinzón 2007; García-Guadilla 2008).

Este trabajo se focaliza en las organizaciones que consideramos de mayor relevancia para la comprensión del denominado *Poder Popular*; es decir, en los Comités de Tierra Urbana (CTU) y en los Consejos Comunales (CC). Los CTU constituyen una de las organizaciones sociales de base popular con más amplia trayectoria dentro del proceso bolivariano y los CC son la organización social con el mayor número de miembros; ambas organizaciones se enmarcan en la propuesta de democracia participativa y protagónica sancionada en la CRBV de 1999 y en el caso de los CC, se les considera el motor del poder popular.

El objetivo de este trabajo es analizar los dilemas que surgen en el proceso de construir el poder popular como un sujeto autónomo que fundamente la democracia participativa y protagónica y evaluar si los CTU y los CC, organizaciones en las cuales éste se ha encarnado, suponen la emergencia de subjetividades sociales asociadas con dimensiones nuevas de la ciudadanía tales como la inclusión, la diversidad cultural, la equidad y la democratización de los procesos de toma de decisiones. También se evaluará el potencial que tienen para generar un proyecto de sociedad alternativo y autónomo que trascienda los meros intereses reivindicativos y que permita la construcción de hegemonía para la transformación social sin perder su capacidad movilizadora; es decir “sin tomar el poder” (Holloway 2002). Para ello, se requiere de la autonomía entendida según Katsiaficas (2007) como la capacidad de tomar decisiones de manera independiente del gobierno y/o de otra forma institucional u organizativa como los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales.

Se parte de la hipótesis que la afinidad ideológica de estas dos organizaciones con el Proyecto Bolivariano promovido por el presidente Chávez genera tensiones en sus identidades sociales y en su potencial de autonomía. La autonomía con respecto al Estado no quiere decir que las organizaciones no puedan apoyar el proyecto bolivariano o recibir recursos del Estado; significa que sus acciones y praxis deben responder en primer lugar a los objetivos propios que se desprenden de su identidad y no a las presiones o proyectos del Estado. Dado que las dos organizaciones a estudiar surgieron desde arriba, que el proyecto sociopolítico bajo el cual enmarcan sus acciones es el Proyecto Bolivariano y que además tienen la capacidad de recibir recursos del

Ejecutivo, existe el potencial de ser cooptados, caer en prácticas clientelares y desdibujarse en sus identidades.

Se estudiará el alcance y los límites de los CTU y de los CC intentando responder a los siguientes interrogantes: ¿sus praxis responden a la democratización y al ejercicio real de la soberanía popular o por el contrario, al clientelismo político y al populismo?, ¿se trata de espacios para empoderar a las organizaciones sociales o espacios para estatales para controlarlas?, ¿tienen o no la capacidad de movilizarse autónomamente a favor de nuevas formas de ciudadanía incluyentes que activen la democracia participativa sancionada en la CRBV de 1999?

Dado que ambas organizaciones se han propuesto como figuras de organización ciudadana a nivel local, se analizará también si comparten una identidad colectiva que trascienda el carácter reivindicativo y local de las demandas y promuevan la participación en niveles superiores: ¿son capaces de constituirse en espacios de debate y ciudadanía y generar transformaciones que vayan más allá de su comunidad?, ¿sirven para enriquecer las identidades sociales y culturales y, de este modo, contribuir al pluralismo de los modos de vida urbanos trascendiendo las diferencias de clase social y la elevada polarización social, política e ideológica existente?, ¿son capaces de generar un proyecto de sociedad que trascienda los meros intereses reivindicativos y que permita la construcción de hegemonía para la transformación social?

El análisis partió de un auto-diagnóstico sobre los CTU y CC el cual se enriqueció con entrevistas (GAUS 2007; 2008) e información primaria proveniente de tesis, pasantías de grado y trabajos en la cátedra de Dinámica Social Urbana (Contreras 2005; 2006; Pinzón 2006; 2007; Salazar 2003; Giuffrida/Salcedo 2005). El levantamiento de información implicó un acompañamiento exhaustivo con observación participante en unos diez CTUs y dieciocho CC; incluyó, además, entrevistas semi-estructuradas en doce CC de los sectores populares y en seis de la clase media. Adicionalmente, se utilizó información secundaria de carácter documental, hemerográfica y digital que incluyó los resultados de las asambleas y encuentros realizados por los CTU y CC, manifiestos, entrevistas periodísticas y opiniones digitales entre otros documentos valiosos.

Dentro del enfoque dinámico que utilizamos, se asume que las subjetividades e identidades de los CTU y de los CC se encuentran en

proceso en construcción por lo que el análisis de estas experiencias se focalizará en las praxis, entendiéndolas como el conjunto de relaciones sociales y políticas que se dan en estos espacios comunales.

## **2. La construcción del poder popular: tensiones y contradicciones**

Las luchas urbanas populares se intensificaron a partir de la crisis de los ochenta debido a la falta de una política integral dirigida a tales sectores y a las medidas de corte neoliberal que se tomaron, incluyendo la privatización de los servicios urbanos básicos (Arconada 2005, López Maya 2005, Lacabana y Cariola, 2005). Desde los ochenta hasta fines de los noventa, los sectores populares organizaron sus luchas alrededor del acceso a los servicios básicos y a la vivienda; con la llegada del presidente Chávez al poder, tales demandas adquirieron un rol protagónico.

### *2.1 El derecho a la vivienda y los Comités de Tierra Urbana*

#### *2.1.1 Identidad, ciudadanía e inclusión*

Los CTU son nuevas formas de organización de los sectores populares creados mediante el Decreto Presidencial 1.666 (2002) de manera de regularizar la tenencia de la tierra y garantizar el derecho a la vivienda que sanciona la CBRV de 1999. Según la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra (2006) para el año 2006 existían casi 6.000 CTU con presencia en la mayor parte de los barrios pobres del país y con una cobertura cercana al millón de familias (García-Guadilla 2007a).

Constituyen una de las organizaciones sociales de base popular con mayor trayectoria ya que en gobiernos anteriores, se dieron frecuentes movilizaciones y formas organizativas de la población afectada por estos problemas. Al igual que en el pasado, los CTU defienden los derechos constitucionales de ciudadanía mediante las demandas del “derecho a la ciudad, al hábitat y a una vivienda digna”. Según los estatutos, son espacios privilegiados de la democracia participativa ya que a nivel formal, deben ser democráticos en su estructura y funcionamiento y las decisiones importantes, incluyendo su propia constitución, deben tomarse en asambleas de ciudadanos.

Según el Decreto 1666, sus funciones son llevar a cabo el proceso de consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Populares; inventariar las viviendas en los barrios populares; levantar planos provisionales que permitan identificar los límites geográficos de la comunidad e identificar el ordenamiento urbanístico espontáneo e histórico de los barrios, el parcelamiento y sus usos; hacer listados de los miembros de la comunidad a los fines de elaborar colectivamente un documento de reconocimiento del barrio; y participar en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas para la rehabilitación integral del barrio.

Los CTU poseen una identidad territorial y socio-cultural ya que para constituirlos, se delimita, en primer lugar, el espacio geográfico o *el territorio* conocido como la poligonal, conformado por 200 familias las cuales deben elaborar *La Carta del Barrio* donde se recoge la historia, idiosincrasia, usos, costumbres y tradiciones de cada sector popular y se incluyen las normas mínimas de convivencia acordadas por la comunidad las cuales comprometen a todos los miembros en un proyecto colectivo (Salazar 2003).

Estas reivindicaciones asociadas al territorio hacen que el espacio se convierta en uno de los elementos que proporciona identidad a la pluralidad de personas diversas; a su vez, la identidad socio-cultural se basa en el rescate de “la forma de vida propia” lo que significa que se reivindica el barrio como la forma legítima de vida social y de ocupación del espacio. A través estas reivindicaciones, los CTU junto con otros sectores populares abogan por una democracia de la diferencia o de la igualdad compleja (Hopenhagen 2000: 116); es decir, por la “[...] igualdad de oportunidades para afirmar la diferencia y protegerse contra mecanismos de exclusión social y discriminación cultural” independientemente de las causas de tal exclusión.

Adicionalmente, en sus luchas se expresa una identidad de clase social pues es, justamente, en su condición de clase excluida de la ciudad formal que ha tenido que construir su propio hábitat, donde reside el elemento identitario de los CTU. A través de reivindicar el derecho a una vivienda digna y a la propiedad de la tierra donde está construida, expresan la lucha contra la exclusión social, política y económica; es decir, la lucha por dejar de ser invisibles y por participar en el juego político y en los procesos de toma de decisiones.

Puesto que estas demandas de los CTU expresan el reclamo de los sectores populares por el derecho a “vivir en la ciudad”: la lucha por la tierra no es tan sólo una demanda de carácter reivindicativo sino la exigencia de un derecho lo cual dota a los CTU de un contenido político que deriva del hecho que los sectores populares son y se consideran “los excluidos de la ciudad” y, por tanto, construyen su identidad alrededor del derecho a la ciudadanía. Dado que este estatuto de ciudadanía fue plasmado en la CRBV de 1999, las demandas se dirigen a hacer realidad el precepto constitucional de ser incluidos e, incluso, van más allá pues reivindican la diversidad cultural y el derecho a ser reconocidos y a construir la ciudad colectivamente dentro de una visión plural donde todos quepan; es decir, reivindican el derecho al “hábitat” y al “habitar” bajo nuevas formas o modelos de ciudad que requieren de una construcción colectiva y plural (Antillano 2005).

Las conexiones entre las demandas y el análisis político de los conflictos en los que participan, expresan una “objetividad-subjetiva”, una acción con sentido ligada a la historicidad. Los CTU encuentran en su horizonte la dominación y la explotación que le da forma a las posiciones de los agentes como clases populares (Múnera 1998). De este modo, el reclamo por el derecho a una vivienda digna (que incluye el derecho a la propiedad de la tierra) pasa por la participación en los procesos de diseño de políticas y de planificación de la ciudad; es decir, se transforma en la lucha por el ejercicio de un derecho político como lo es el derecho a la participación para incidir en los asuntos de la Polis. Ello es resultado del carácter antagónico de sus demandas que expresan la resistencia al discurso dominante y la posición de subordinación que mantienen los habitantes de los barrios pobres con la ciudad.

### *2.1.2 Entre la autonomía y la cooptación: visiones y tensiones*

Los CTU se relacionan con las instituciones del Estado en el marco de una gestión de gobierno que reconoce el derecho a la vivienda digna y a la propiedad de la tierra al tiempo que estimula la participación ciudadana. Si bien pudiera pensarse que esta relación atenta contra su autonomía organizacional, el tratamiento de las necesidades históricas de los sectores populares desde una perspectiva de “derechos” permite

explorar la participación popular como un ejercicio de construcción de ciudadanía.

Es preciso destacar que la perspectiva de “derechos” inserta en la CRBV de 1999 no descarta la existencia de algún tipo de vinculación con el Estado ya que ello no contradice el rol del Estado como garante de los derechos sino que reconoce la responsabilidad de éste y de la sociedad en la gestión de las políticas sobre derechos humanos en general, y sobre el derecho a la vivienda, en particular. Los CTU se consideran autónomos por la autogestión e independencia del Estado en los procesos de decisión y por sus demandas y visiones alternativas de sociedad: demandan la valoración de la titularidad de la tenencia de la tierra que está asociada a la protección de los individuos y de las comunidades contra el desalojo y no tan sólo al valor mercantil de la misma; también defienden el derecho a su cultura y modo de vida y la democratización del suelo que consideran “un requisito fundamental no sólo para hacer viable una política de vivienda de alcance masivo, sino que es un instrumento esencial para lograr el equilibrio territorial” (Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana 2004: 7). De forma cónsona con lo anterior, exigen ser co-responsables con el Estado en la gestión de esta política y no meros beneficiarios de un programa.

Si bien los CTU se auto-definen como autónomos a partir de su participación e impacto en las políticas del Estado y de la posibilidad de plasmar su proyecto de sociedad alternativo en dichas políticas, la construcción de estas nuevas subjetividades incorpora diferentes formas de relación con el Estado y múltiples estrategias que producen, a su vez, tensiones y contradicciones en lo que respecta a la autonomía. Los análisis realizados sobre los CTU en los municipios Sucre y Baruta del Área Metropolitana de Caracas y en el Municipio Caroní de Ciudad Guayana indican que no siempre las decisiones se toman de forma autogestionada.

Además de la relación eminentemente clientelar y populista con la Vicepresidencia de la República a la cual están adscritos, el organigrama de las relaciones informales de los CTU mostró que en algunos casos, dependían en su estructura jerárquica de los Círculos Bolivarianos o de las Misiones Sociales promovidas por el gobierno. La necesidad de contar con una base social y organizativa llevó al presidente Chávez a crear los CTU y los CC entre otras organizaciones con la

idea de convertirlos en los bastiones de su proyecto político; frecuentemente, los partidos políticos pro-chavistas los han utilizado como clientela política para movilizarla electoralmente en apoyo al presidente o a su proyecto político. Los partidos afines al gobierno como el Movimiento Quinta República (MVR) en el pasado y en la actualidad, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e incluso el presidente, activan mecanismos de presión a través de

Comandos y Unidades de Batalla Electoral (UBE) para que los CTU se movilicen y apoyen al gobierno cuando se cuestiona el proyecto bolivariano o a su líder máximo, en las elecciones políticas a nivel estatal, local o nacional, o en los diversos referéndum (Contreras 2005; 2006; Giuffrida/Salcedo 2005; García-Guadilla 2007a).

El presidente Chávez pidió en el 2005 desempolvar las UBE que fueron utilizadas en el referéndum revocatorio presidencial de agosto de 2004 para articularse con las demás organizaciones populares como los CTU:

debemos trabajar con las Unidades de Batalla Electoral o crear una figura nueva, pero necesitamos una instancia articuladora que integre a los comités de salud, los comités de tierra urbana, los comités campesinos [...] los comités de vivienda [...] (Aporrea 2005).

De acuerdo con Izarra (2007) las UBE “facilitan la convergencia de todas las instancia populares que tienen responsabilidad social” ya que las mismas “[...] se deben exclusivamente al proceso y a las instrucciones que emita su líder”.

El abandono temporal del espacio de los CTU y su movilización política no necesariamente implica que éstos dejen de ser autónomos sino que se desactivan coyuntural y temporalmente frente a las visiones contradictorias de sus miembros. Los CTU han tendido a integrarse a una red política sumergida e invisible a favor de Chávez que aflora o se visibiliza cuando esta en juego el poder político; es decir, en las crisis políticas o en las elecciones. Cuando los CTU se movilizan como parte de esta red que busca la continuidad del poder, abandonan sus espacios organizativos y se mimetizan temporalmente con los Comandos, las UBE, los Círculos Bolivarianos, el PSUV u otra instancia política.

Sin embargo, en la medida que la polarización y la crisis política se han agudizado existe el riesgo que estas identidades y “lealtades” políticas que prevalecen temporalmente tiendan a convertirse en per-



manentes y entren en conflicto o desplacen a las identidades colectivas de los CTU, sobre todo dada la presión existente para que los coordinadores y miembros de los CTU se inscriban y participen activamente en los partidos políticos afines al proceso. De hecho, a partir de 2007, la aceleración del proyecto revolucionario y socialista del presidente Chávez ha llevado a la constante movilización de tales organizaciones hacia los objetivos políticos desviándolos de sus propios objetivos.

A diferencia de los CC, la falta de personería jurídica de los CTU para recibir recursos económicos, ha dificultado las prácticas neo-clientelares y favorecido su autonomía con respecto al Estado; además, la identidad colectiva y el enfoque de “derechos” que detentan les han permitido mantener una mirada crítica y pedir la rendición de cuentas al gobierno sobre el uso de los recursos que utiliza para satisfacer sus demandas. Sin embargo, esta carencia de recursos propios pudiera tentarlos a adscribirse a los CC, tal como lo pretende la Ley de Los Consejos Comunales y caer en las extensas redes clientelares del gobierno.

### **3. Los Consejos Comunales: ¿organizaciones para el clientelismo y la movilización política?**

#### *3.1 ¿Actor técnico o político?*

Al igual que los CTU, los CC son organizaciones sociales creadas por iniciativa Presidencial para encarnar a un nuevo actor comunitario con capacidad de auto-diagnosticar los problemas de su entorno y estimular el fortalecimiento de las comunidades y su arraigo por el espacio geográfico que habitan. Surgieron con motivo de las elecciones de diciembre de 2006 y se les adscribió a la Comisión Presidencial del poder popular.

A diferencia de los CTU, los CC se dirigieron tanto a los sectores populares como a las clases medias y altas a pesar que la respuesta mas favorable provino de los sectores populares. Una parte de la clase media vio en ellos el mecanismo para recuperar los espacios locales tradicionalmente defendidos por las asociaciones de vecinos y decidió constituirlos, aunque lo ha hecho más lentamente que los sectores populares. También a diferencia de los CTU, los CC reciben financiamiento directo por parte del Estado para la autogestión de sus necesidades.

La cifra de CC dada por el presidente Chávez en el Tercer Gabinete Móvil sobre “La Explosión del poder popular” (2//08/2007) fue de veintiséis mil (26.000) y hoy se estiman cerca de 30.000 por lo que constituye la organización social de base popular con mayor número de miembros.

La Ley de los Consejos Comunales (2006) señala que:

[...] en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e interpretación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y de justicia social (Art. 2).

También han sido definidos como las “unidades primarias de un nuevo orden sociopolítico” de carácter autónomo enfocados a la solución de los problemas de la comunidad y como el “poder popular en marcha, la democracia participativa” (*Aló Presidente* 2006). La normativa legal los vislumbra como los protagonistas del poder popular pues a través de ellos debe ejercerse la soberanía del “pueblo” al que se considera como el sujeto histórico del proyecto socio-político y popular del presidente Chávez. A comienzos del 2007 se les encomendó el rol protagónico de servir de “combustible de los cinco motores constituyente [...] en el marco de la constitución y profundización de la Revolución Bolivariana en el camino al Socialismo” (MINCI 2007: 8).

Se asume que sirven para el aprendizaje y la socialización de sus miembros en nuevas formas de relacionarse con lo social, económico y político y que al menos discursivamente, son el sujeto revolucionario por excelencia y la piedra angular para construir el poder popular y hacer las transformaciones necesarias para concretar la revolución bolivariana y así, arribar al Socialismo del Siglo XXI (García-Guadilla 2008).

Al igual que los CTU, los CC tienen una estructura organizativa democrática puesto que se constituyen mediante la Asamblea de Ciudadanos; no obstante, sus funciones y competencias fueron ampliadas con respecto a las figuras organizativas que le precedieron. Además de definir y jerarquizar las necesidades básicas de la comunidad, participar directamente en la gestión de las políticas públicas y tomar decisiones en la solución de los problemas que los afectan, pueden recibir

los recursos públicos que les transfiera el Estado central para la ejecución de los proyectos comunitarios y se les permite administrarlos, ejecutarlos y ejercer la contraloría social de manera directa.

Dada la relevancia que tienen en el proyecto socio-político del presidente Chávez, su activación ha traído como consecuencia que la participación popular para la gestión comunitaria en los sectores populares que estuvo enmarcada en los Círculos Bolivarianos primero y después en los diferentes comités, incluidos los CTU, se haya desplazado hacia los CC. La Ley de los Consejos Comunales (2006) los privilegia como la instancia de organización comunitaria por lo que constituyen el eje donde discursivamente se ancla el poder popular y contemplan la posibilidad de incorporar en su seno a través de *Comités*, a las otras organizaciones de los sectores populares incluyendo a los CTU. Por esta razón, los CC han tendido a desplazar a las demás organizaciones ciudadanas que existen no solo en los sectores populares sino también en las urbanizaciones de la clase media y alta.

## 2.2 La autonomía y sus condicionantes: nuevos clientelismos

Desde la oposición política e incluso, desde algunos de los voceros y organizaciones afines al proceso bolivariano como los propios CTU, se ha puesto en tela de juicio el manejo directo de los recursos otorgados por el Estado ya que no existe independencia de la función de contraloría social. También se ha cuestionado su pretendida autonomía y se duda de su capacidad para incluir a todos los ciudadanos independientemente de su ideología y clase social.

La actividad principal de los CC, sea en los sectores populares o en la clase media, ha sido la formulación de proyectos que benefician a su ámbito territorial y el factor que los mantiene activados es la obtención de los recursos económicos pues una vez que los mismos se ejecutan o no llegan, tienden a desactivarse.

Cuanto mayor es la dependencia de los recursos del Estado, mas probable es la cooptación y aparición de relaciones neoclientelares<sup>1</sup> que hacen que los CC sean mas vulnerables a las presiones del gobierno para movilizarse en los procesos político-electorales. Además, su

---

1 Se trata de nuevos clientelismos; es decir, de relaciones de subordinación entre las organizaciones y el Estado en vez de los clientelismos tradicionales basados en relaciones personales o individuales (García-Guadilla 2002).

adscripción a la Vicepresidencia de la República, ente que otorga los recursos, facilita este tipo de relación donde los afectos al presidente reciben los recursos económicos con mayor frecuencia que quien lo adversa. La relación populista y la dependencia neoclientelar (García-Guadilla 2002) es mayor en los sectores populares que en la clase media y alta debido a la polarización política. De hecho, los CC cuyos miembros se han inscrito en el PSUV y participan activamente en el proceso político electoral pro-Chávez reciben recursos con más frecuencia que los CC de la oposición política ya que frecuentemente, se exige la afiliación ideológica y política para obtenerlos.

### *2.3 El poder popular en marcha*

Existe un debate interno alrededor de si los objetivos de los CC son construir el poder popular visionado por el Presidente Chávez o resolver los problemas comunitarios o ambos. Si bien la mayoría de los CC incluyendo a los de clase media y alta se autodefinen como una correa de transmisión para el otorgamiento de recursos del gobierno, algunas organizaciones populares pre-existentes que se han reconfigurado alrededor de instancias tales como el Frente Nacional Comunal y Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora o las radios comunitarias entre otras, se auto-definen como movimientos sociales populares y como el Poder Popular en marcha. Estos grupos propugnan la visión de empoderamiento de los CC y su objetivo es convertirse en el poder popular para supuestamente construir “el Socialismo del Siglo XXI”. Aunque comparten el proyecto bolivariano del Presidente Chávez, parecen tener un mayor potencial de autonomía que el resto de los CC debido a su trayectoria como movimiento social y a sus objetivos que trascienden el carácter clientelar con que han surgido los CC. Entre las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Consejos Comunales (2007) se destaca lo siguiente:

Consideramos que, el camino correcto que tenemos como pueblo combatiente es construir una corriente revolucionaria de base y autónoma que acompañe concientemente al Presidente en toda iniciativa tendiente a construir el socialismo bolivariano y derrotar al reformismo y la contrarrevolución.

Creemos como consejos comunales que la vía más expedita para construir el estado comunal es asumir el poder, a partir del ámbito local, desde una perspectiva económica, político, militar, cultural y social; por ello, debemos actuar en bloque, dotándonos de niveles superiores de or-

ganización y coordinación, siendo fundamental constituir un movimiento que nos dé voz, cuerpo y rostro como poder comunal, en todo el proceso de construcción del socialismo en Venezuela.

La continuidad de esta relación clientelar dependerá de la bonanza económica, actualmente en crisis, pues de ella deriva la capacidad del Estado para transferir recursos y seguir la ya conocida práctica de “neutralizar los conflictos con la renta petrolera”. A su vez, la posibilidad de que aquella minoría de CC que defiende su autonomía y se autodefine como movimientos sociales populares trascienda el dilema del clientelismo, dependerá de su capacidad para mantenerse autónomos después de “asumir el poder” que visionan.

#### **4. Tensiones, contradicciones y desafíos**

El proceso bolivariano está atravesado por las contradicciones que implican una propuesta de transformación social dentro de una sociedad profundamente polarizada (García-Guadilla 2007b) lo cual se refleja principalmente en las organizaciones sociales afines al proceso bolivariano donde existen fuertes divergencias entre el discurso y las praxis, entre la cooptación y la autonomía, entre el clientelismo y las nuevas prácticas de ciudadanía. Estas tensiones se enfrentan de forma diferente según el enfoque que las organizaciones adopten sobre el poder y la autonomía: mantenerse fuera del poder o formar parte del mismo y recibir las prebendas sacrificando la autonomía.

Las organizaciones bolivarianas analizadas responden en su concepción y se orientan en sus praxis a hacer realidad los preceptos constitucionales de la *inclusión*, la *equidad* y la *participación*. No obstante, de acuerdo con su identidad y demandas estratégicas, los CTU han defendido el espacio de los movimientos sociales ubicándose en el primer enfoque mientras que los CC parecen encaminados hacia el segundo.

Al interior de los CC, se libra una lucha entre constituirse en una instancia para-estatal clientelar y mantener su autonomía a costa de entrar en conflicto con el gobierno. En los CC estudiados, no se ha roto la estructura de relaciones tradicionales clientelares y, por tanto, no son espacios donde se construyan nuevas subjetividades o se promuevan ciudadanías y proyectos de sociedad divergentes. La mayoría de los CC carecen de la capacidad para enriquecer las identidades

sociales y culturales y, de este modo, contribuir al pluralismo de los modos de vida urbanos ya que no han generado un proyecto de sociedad autónomo, alternativo y divergente del Estado que permita la construcción de hegemonía para la transformación social.

En la praxis de la mayoría de los CC se refleja una inclusión que implica la satisfacción de las necesidades básicas y materiales pero que no contempla las necesidades postmateriales; de una equidad identificada con la igualdad formal difícil de concretar; y de una participación que al concentrarse en lo local no permite trascender a niveles superiores. Además, no tienen la capacidad de trascender hacia nuevas formas de ciudadanía ni de construir un *poder popular autónomo* que fundamente la democracia participativa y protagónica debido al alto potencial de ser cooptados por los actores afines al proceso bolivariano; reflejan un *poder popular tutelado* por el Estado.

En el caso de los CTU, la emergencia de subjetividades socio-territoriales que generaron identidades basadas en la diversidad cultural, democratización de la sociedad y rechazo a las prácticas populistas del gobierno, garantizan una mayor autonomía y potencial para constituir el *poder popular autónomo*. Suponen, además, el enriquecimiento del concepto de ciudadanía debido a la emergencia de subjetividades sociales asociadas con nuevas dimensiones tales como la inclusión en los aspectos materiales y postmateriales, la igualdad dentro de las diferencias y pluralidad cultural, y la participación en los procesos de toma de decisiones.

En este tipo de organizaciones se encuentra el germen potencial para la transformación social; es decir para generar un proyecto de sociedad alternativo y autónomo que trascienda los meros intereses reivindicativos y que permita la construcción de hegemonía para la transformación social sin perder su capacidad movilizadora; es decir “sin tomar el poder”. Paradójicamente, a pesar de su alto potencial para definir un proyecto alternativo propio y de su mayor capacidad para constituirse en un *poder popular autónomo*, el gobierno intenta desmovilizar a los CTU al presionarlos a adscribirse a los CC como medio para la participación local. Adicionalmente, la superposición geográfico-organizativa y funcional de los CC con los CTU, pudiera contribuir a debilitarlos o desplazarlos en la medida que los CC responden en mayor grado a una lógica política; ello llevaría a un retro-

ceso en el proceso de construcción de las ciudadanías diferenciadas y al empobrecimiento de los espacios de autonomía.

El dilema principal se centra en cómo resolver el problema de la inclusión y construir ciudadanías más incluyentes desde fuera del poder para no arriesgar la autonomía de las organizaciones sociales: ¿es necesario “tener y estar adentro del poder” para transformar la condición de exclusión de los habitantes de los sectores populares o es suficiente el que compartan con el Estado un proyecto ideológico-político que promueva y estimule las nuevas subjetividades e identidades colectivas?, ¿las luchas por la inclusión pueden darse desde identidades sociales no contaminadas por las organizaciones o partidos políticos o requieren de organizaciones sociales capaces de actuar en las dos esferas, la social y la política según sea la coyuntura en la que se insertan?, y finalmente, ¿qué papel juega la cultura política en la construcción de estas nuevas identidades y subjetividades que permitan avanzar un proyecto de cambio como supuestamente se denomina el Proyecto Bolivariano del presidente Chávez? De nuevo, estamos frente a dos caminos, tal como lo han planteado Negri y Holloway, cuyos resultados deben ser refrendados con el enriquecimiento de un número más diverso de praxis pues es en las praxis donde reside el movimiento social y por ende, la capacidad de transformación.

### Bibliografía

- Aló Presidente* (2006): *Programa radial y televisivo*, n° 252. 9 de abril.
- Antillano, Andrés (2005): “La lucha por el reconocimiento y la inclusión en los barrios populares: la experiencia de los Comités de Tierras Urbanas”. En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 11, 3, pp. 205-218.
- Aporrea* (2005): <www.aporrea.org> (15.08.2005).
- Arconada, Rodríguez S. (2005): “Seis años después: mesas técnicas y consejos comunitarios de aguas”. En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 11, 3, pp. 187-204.
- Asamblea Metropolitana de Comités de Tierra Urbana de Caracas (2004): *Democratización de la ciudad y transformación urbana: propuesta de los CTU a la Misión Vivienda*. Caracas: OTNRTT, Vicepresidencia de la República.
- Contreras, Verónica (2005): “Proyecto de regularización de la tenencia de la tierra: sector Toro Muerto, Municipio Caroní”. EP-1420, Pasantías Cortas. Manuscrito. Caracas: GAUS-Universidad Simón Bolívar.
- (2006): “Los retos de la Planificación Estratégica: formulación del Plan Especial Participativo, Equitativo y Solidario del Sector Toro Muerto, Municipio Caroní”.

- Trabajo de Grado para optar al Título de Urbanista. Manuscrito. Caracas: GAUS-Universidad Simón Bolívar.
- Decreto Presidencial 1.666 (2002): *Gaceta Oficial*, n° 37.378. Caracas.
- García-Guadilla, María Pilar (2002): "Democracy, Decentralization, and Clientelism: New Relationships and Old Practices". En: *Latin American Perspectives*, 126, 29, 5, pp. 90-109.
- (2007a): "Ciudadanía y autonomía en las organizaciones sociales bolivarianas: los Comités de Tierra Urbana como movimientos sociales". En: *Cuadernos del CENDES*, 24, 66, pp. 43-73.
- (2007b): "Social Movements in a Polarized Setting: Myths of Venezuelan Civil Society". En: Ellner, Steve/Thinker Salas, Miguel (eds.): *Venezuela, Hugo Chavez and the Decline of an "Exceptional Democracy"*. Lanham: Rowan & Littlefield Publishers.
- (2008): "La praxis de los consejos comunales: poder popular o instancia clientelar?". En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 14, 1, pp. 125-151.
- GAUS-USB (2004-2006). *Entrevistas a miembros de los Comités de Tierra Urbanas de los Municipios Libertador, Sucre y Baruta en Caracas y Caroní en Ciudad Guayana*. Caracas.
- (2007): *Entrevistas a miembros y Consejos Comunales en Caracas y Estado Sucre*. Bases de Datos del GAUS.
- (2008): *Entrevista a Consejos Comunales de barrios y urbanizaciones de clase media de Caracas*. Base de Datos del GAUS.
- Giuffrida, Laura/Salcedo, María (2005): "Comités de Tierra Urbanos y cambios de la Dinámica Urbana en cuatro comunidades". Manuscrito. Caracas: GAUS-Universidad Simón Bolívar.
- Hawkins, Kirk/Hansen, David (2006): "Dependent Society: The Círculos Bolivarianos in Venezuela". En: *Latin American Research Review*, 41, 1, pp. 102-132.
- Holloway, John (2002): *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*. Buenos Aires: Herramienta.
- Hopenhayn, Martín (2000): "Nuevas formas de ser ciudadano: ¿La diferencia hace la diferencia?". En: *Releas Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados*, 11, pp. 109-122.
- Izarra, William (2007): <[www.Venezuela-alemania.com/cfi8.html](http://www.Venezuela-alemania.com/cfi8.html)> (11.12.2007).
- Katsiaficas, Georgy (2007): "El significado de la autonomía". Caosmosis (<[www.caosmosis.acracia.net](http://www.caosmosis.acracia.net)>; 29.01.2008).
- Lacabana, Miguel/Cariola, Cecilia (2005). "Construyendo la participación popular y una nueva cultura del agua en Venezuela". En: *Cuadernos del CENDES*, 22, 59, pp. 111-133.
- Ley de los Consejos Comunales (2006): *Gaceta Oficial*, No. 38.439. Caracas.
- López Maya, Margarita (2005): "Popular Protest in Venezuela: Novelties and Continuities". En: *Latin American Perspectives*. 141, 32, 2, pp. 92-108.



- MinCI (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información) (2007): *Consejos Comunales: Combustible de los Cinco Motores Constituyentes* (<www.minci.gov.ve>; 12.03.2008).
- Múnera Ruiz, Leopoldo (1998): *Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular*. Bogotá: Universidad Nacional, IEPRI-CEREC.
- OTNRTT (Oficina Técnica Nacional de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana) (2005): *Programa Nacional de regularización de la Tierra urbana*. Caracas.
- Pinzón, Maria Gabriela (2006): “Planificación estratégica y participativa. Casos de Estudio: Consejo Comunal de Santa Rosa de Lima, Consejo Comunal de Bucarito, Municipio Baruta”. Pasantías Cortas (EP-1420). Manuscrito. Caracas: GAUS-Universidad Simón Bolívar.
- (2007): “Plan Especial Estratégico, Participativo, Equitativo y Solidario para Playa Colorada, Estado Sucre”. Trabajo de Grado para optar al Título de Urbanista. Manuscrito. Caracas: GAUS-Universidad Simón Bolívar.
- Primer Encuentro Nacional de Consejos Comunales (2007): En: <www.tiempodecuba.34sp.com> (06.08.2007).
- Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2006): *Gaceta Oficial*, n° 38591. Caracas.
- Rivas, M. (2004): “El Problema de los barrios”. En: Dossier de la revista *SIC*, 665, pp. 211-221. Caracas.
- Salazar, Carolina (2003): “Los Comités de Tierra Urbana: ¿Un nuevo Movimiento Social?”. Manuscrito. Caracas: GAUS-Universidad Simón Bolívar.

